

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

TRIBUNAL EN PLENO

Sesión del día miércoles veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

PRESIDENTE: Señor Ministro Licenciado
CARLOS DEL RIO RODRIGUEZ

ASISTENCIA: Señores Ministros Licenciados:
CARLOS DE SILVA NAVA
SALVADOR ROCHA DIAZ
SAMUEL ALBA LEYVA
MARIANO AZUELA GUITRON
NOE CASTAÑON LEON
PELIPE LOPEZ CONTRERAS
LUIS FERNANDEZ DOBLADO
FRANCISCO PAVON VASCONCELOS
VICTORIA ADATO G. DE IBARRA
SANTIAGO RODRIGUEZ ROLDAN
JOSE MARTINEZ DELGADO
JORGE CARPIZO MAC-GREGOR
ATANASIO GONZALEZ MARTINEZ
JOSE MANUEL VILLAGORDOA LOZANO
FAUSTA MORENO FLORES
SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIERREZ
JUAN DIAZ ROMERO
ULISES SCHMILL ORDOÑEZ

AUSENTE: Señor Ministro Licenciado
ANGEL SUAREZ TORRES

Principió la sesión a las 11:45 horas.

EL M. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión, dé cuenta señor Secretario.

AMPARO EN REVISION 5483/85
GRANJA SAN GERMAN DE GUAYMAS,
SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

EL C. SRIO. LIC. SERGIO NOVALES CASTRO.- "...,
contra actos del Congreso del estado de Baja California-
y de otras autoridades, consistentes en la expedición y-
aplicación de la Ley de Ganadería de la mencionada enti-
dad federativa, reformada mediante el decreto publicado-

en el Periódico Oficial de ese estado del 10 de agosto -
de 1982, concretamente en cuanto a sus artículos 10, - -
fracción II, y 171. (PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SUAREZ-
TORRES)".

EL M. PRESIDENTE.- Señores Ministros, dada la -
ausencia del señor Ministro Suárez Torres, someto a la -
consideración de ustedes la conveniencia de retirar de -
la lista este asunto, y que se presente cuando lo estime
conveniente el Ministro correspondiente.

Están de acuerdo?, tome nota señor Secretario.
Siga dando cuenta.

- - - - -

AMPARO EN REVISION 9155/87
JESUS CAMOU MOLINA Y COAGRAVIADOS.

EL C. SECRETARIO.- "..., contra actos del Con-
greso del estado de Sonora y de otras autoridades, con--
sistentes en la expedición y aplicación de la Ley número
74 que creó el Consejo Tutelar para Menores de ese esta-
do, publicada en el Boletín Oficial de la propia entidad
federativa del 3 de junio de 1985. (PONENCIA DEL SEÑOR -
MINISTRO CHAPITAL GUTIERREZ)", en la que se propone en -
lo que es materia de la competencia de este Tribunal Ple-
no de la Suprema Corte de Justicia, se confirme la sen--
tencia que se revisa, se niegue el amparo a los quejosos
en contra de la aprobación, sanción, promulgación y pu--
blicación de la Ley que se reclama, para los efectos de--
su competencia se reserve jurisdicción al Tribunal Cole-
giado del Quinto Circuito en turno, con residencia en --
Hermosillo, Sonora, al que deberá remitirse copia autori-
zada de la ejecutoria, y el juicio de amparo correspon--
diente.

EL M. PRESIDENTE.- Está a discusión el proyecto. Tiene la palabra el señor Ministro González Martínez.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Honorable Pleno, estoy conciente de que hay algunos precedentes semejantes al que estamos viendo ahora, el proyecto del Ministro -- Chapital, y que yo voté con ellos; pero relejendo este asunto en concreto yo me encuentro algunas contradicciones, entiendo y estoy conciente que esta situación de menores infractores es un régimen de excepción, pero precisamente por ser régimen de excepción, créo que debe gozar y goza; para, desde mi punto de vista de una mayor protección de la sociedad en los menores infractores.

Yo por ejemplo entre algunas de las posibles contradicciones que yo veo aquí y que indudablemente -- cuando menos esta Ley --pues tal vez tenga algunas fallas de tipo constitucional--, es decir en que sus normas no se ajustan a la norma constitucional, y voy a poner algunos de los ejemplos por los que a mí me asalta una duda, --repito--; estoy conciente que voté en asuntos semejantes a favor; pero ahora esa duda quiero externarla al H. Pleno, por ejemplo, se dice en el proyecto: "que el Consejo Tutelar para Menores del estado de Sonora, no realiza un procedimiento punitivo para los menores infractores"; y entonces mi duda es la siguiente: -- bueno, sí ^{de} lo que se duelen es que está privado de la libertad este chamaco, este quejoso, pues qué no será ya -- aquí una acción punitiva?

No estoy entrando a ver si está bien o mal la resolución que dictó el Tribunal de Menores o uno de los Consejeros de Menores, pero sí me encuentro por ejemplo--

con este problema, esta contradicción para mí insisto, - dice: "no hay un procedimiento punitivo, pero se están quejando de que a esta persona ya lo internaron, lo privaron de su libertad, lo privaron de su familia", inclusive es cuando dice: "no hay la posibilidad de salir en libertad bajo caución o por depósito o por una serie de posibilidades", estamos ante un menor de edad; después - también se duelen de que la Ley señala que habrá un defensor, pero que aparentemente no permite o cuando menos no hay esa posibilidad de que dá la Constitución, pues - que se nombre un defensor particular en un momento dado.

En consecuencia, yo sí creo que hay algunos elementos para mí en donde pues, tal vez debemos reconsiderar más esta situación, porque me dá la impresión de que queremos proteger a los menores de edad, pero es una protección, más bien es una improtección la que les estamos dando, de acuerdo con lo que se dice en el proyecto, hay sanción, hay privación de la libertad; no se permite aparentemente el nombrar un defensor de oficio, e inclusive el aspecto de recursos, pero yo no sé los recursos, no me adentré en el aspecto de los recursos, pero también - se duele de que no hay ningún recurso, amén de los problemas que él señala, de que en este caso por ejemplo, - el menor ya como hechos, fue detenido con posterioridad - al supuesto robo sin ningún otro elemento, se le priva - de estar con su familia; hay una serie de contradicciones que yo tengo mucha duda y quise externarlas en este H. - Pleno, porque hay brillantes Ministros especialistas en la materia, que no sé si esté yo pecando de excederme en la protección de los menores, pero para mí es una de las riquezas más grandes que tiene México y que debemos preservar.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora-
Ministra Adato.

LA M. ADATO G. DE IBARRA.- Gracias señor Presi-
dente, yo desde luego en primer término quiero externar-
que estoy totalmente de acuerdo con el sentido del pro-
yecto y lo que en él se contiene; me satisface profunda-
mente la preocupación del señor Ministro González Martí-
nez respecto de la protección de los menores, sobre todo
porque toma cabal conciencia de que este es un país de -
gente joven y que gran trascendencia tiene toda la legis-
lación que aborde problemática relativa a menores.

No comparto las afirmaciones que no obstante -
que no son categóricas, ha formulado el señor Ministro -
González Martínez, en relación de que no advierte que ha-
ya una actitud o una tendencia o un objetivo en la Ley -
de protección a los menores.

Debo manifestar en primer lugar que es incues-
tionable que las garantías que en la Constitución se con-
tienen para los gobernados a quienes se les está incoan-
do un procedimiento penal, están precisamente determina-
das y fundamentalmente consisten en la garantía de defen-
sa, la garantía de audiencia, una serie de garantías que
ustedes mejor que yo conocen, porque lo han manejado du-
rante muchos años, pero no hay que perder de vista que -
éste no es un juicio de orden criminal, a virtud de los-
objetivos y del tratamiento que se le ha dado en Materia
Penal, a los que cometen los delitos, se parte de un pre-
supuesto fundamentalmente la existencia de la imputabili-
dad y esto será a partir de los dieciocho años; y los -
que cometen infracciones no delitos, que son menores de-

esa edad que requiere la Ley Penal y la propia Constitución, pues no pueden estar sujetos a un juicio exactamente igual que al que se sigue a los adultos que sí son autores de conductas delictivas, porque tienen capacidad psíquica para el delito, y porque tienen plena madurez del juicio valorativo; por lo tanto la edad que la Ley determina para ser acreedores al juicio de reproche social que en la pena se contiene.

Pero por otra parte si nosotros le damos un análisis pormenorizado a la Ley que crea los Consejeros Tutelares para Menores, advertiremos que hay un tratamiento de carácter tutelar para aquellos menores que no han recibido en las diversas áreas de su formación el tratamiento adecuado; veamos se les da un tratamiento específico en lo pedagógico y en lo médico; y fundamentalmente, en lo relativo a la tutela y a los elementos que determina la patria potestad.

Es indudable que si un menor no ha contado en el desarrollo de su vida con un adecuado tratamiento pedagógico, con un adecuado tratamiento médico, y el consiguiente derivado de derechos que tiene de la patria potestad que sus padres ejercen sobre él, el Estado ha creado un procedimiento de carácter tutelar y volvemos al inicio de esta reflexión, en la ley se contiene una serie de previsiones, una serie de normas que establecen una mayor garantía para los menores, y en rigor no se habla de que un juez lo vaya a juzgar, sino es el concurso de la interdisciplina la que determinará el tratamiento al que se ha de someter al menor que ha incurrido en conductas antisociales porque ha estado deficiente en alguna de las áreas a las que he externado; y si vemos artículo

por artículo de la Ley, advertiremos que hay "garantías mayores que las que para los adultos les toca"; así por ejemplo siempre estarán asistidos por sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad, para que adviertan qué es lo que se les imputa al menor y esté al tanto y al conocimiento de los exámenes que se les practicarán por el concurso de la interdisciplina que va a determinar en qué falla ha incurrido en la formación del menor, de las áreas de la educación, de la medicina o de la familiar a través de la patria potestad.

Es por ello que el tratamiento que la se le da, no es de carácter punitivo sino tutelar, y si bien es cierto de que no goza del beneficio de la libertad provisional bajo caución, es porque los menores no cuentan con la capacidad económica para responder ante una garantía de esa naturaleza, de que no se van a sustraer a la acción de la justicia y que van a comparecer a ella; por qué?, porque es otro el tratamiento, es otra la calidad de los menores frente a la ley, y ahí el fenómeno de que se otorga en guarda y custodia de los padres o quien ejerza la patria potestad, que sustituye la figura de la libertad bajo caución que opera para los adultos.

Yo estimo que es muy explicable la preocupación del señor Ministro González Martínez, pero ello de alguna manera encuentra salvada su preocupación al revisar de manera íntegra la legislación para menores; un vistazo simplemente hacia atrás, de qué pasó antes de que se crearan las leyes que regían las disposiciones que iban a ver, a revisar, a tratar las conductas de los menores infractores; se hablaba de Tribunales para Menores

res, nada más absurdo, no puede haber un Tribunal para juzgar a alguien que no tiene plena capacidad en un orden biológico, educacional y emocional, derivado de que cometió una conducta antisocial, porque fallaron una de esas tres áreas que no fueron atendidas adecuadamente. Es por ello que en esta ley, no solamente se atiende de manera tutelar a los menores, sino -- que se acentúan mayormente las garantías que tienen los adultos, se vierten de una manera más acentuada y protectora para los menores; es por ello que yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto; no estimo que se violen garantías, sino por el contrario, que el Estado está preocupado porque a los menores no se les castigue de algo que no son responsables, porque ne invadan las áreas educacionales o médicas o emocionales familiares, no es imputable al menor, sino el error es de quienes tienen a cargo su formación; es por ello que yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, porque no hay violación de garantías.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Chapital Gutiérrez:

SEÑOR MINISTRO CHAPITAL GUTIERREZ: Gracias señor Presidente; señores Ministros; desde luego que de ninguna manera me atreve - ría a agregar algún argumento a

(sigue segundo turno....)

1.

EL M. RHAPITAL G.-

.....lo que ha expresado la señora Ministra -
Adato sobre la naturaleza de los Concejos Tutelares para
Menores y desde luego la naturaleza jurídica del procedi-
miento que coincide totalmente y así lo expreso en el pro-
yecto que el sentido no es de naturaleza punitivo, sino -
fundamentalmente corrige las conductas contrarias a la so-
ciedad, no quiero agregar, insisto, argumentación alguna -
sobre el particular el proyecto que he presentado a su -
consideración como gentilmente me lo hizo ver el señor -
Presidente, tiene algunos errores mecanográficos que de -
ser aprobado, con gusto los llevaré a cabo, los corregiré
en el engrose y también quiero hacer referencia a que muy
amablemente la señora Ministra Adato me hizo una observa-
ción que estimo totalmente fundada, en la página 36, ca-
sualmente se hizo referencia a ello el Ministro Ponente -
González Martínez, la última parte de la página 36, los -
dos últimos renglones y señalo que el razonamiento relati-
vo a pruebas es también aplicable en lo que toca a la exig-
tencia de algún recurso; es cierto, este razonamiento no -
es correcto, es bastante pobre, llámémoslo así y me haré -
cargo directamente de esta cuestión, en cuanto a lo que -
afirma la parte agra iada en el sentido de que la ley re-
clamada es violatoria de garantías porque no establece re-
curso.

Ya lo hemos considerado en este Tribunal Pleno
que la existencia o no de recursos tengan un ordenamiento
legal, no es suficiente para calificar o para llegar a la
conclusión de que se viole la garantía del debido proceso
legal, en esos términos, desde luego con todo detalle con

2.

testaré el agravio relativo.

Finalmente quiero hacer referencia a algunos comentarios que externó en particular el señor Ministro Carpizo, incluso tuvo la amabilidad de hacerse llegar unas notas sobre el particular que nos demuestran su preocupación por el régimen de los menores, hace algunos cuestionamientos que resultarían interesantes a ustedes conocerlos; por ejemplo, me pregunta el señor Ministro Carpizo, en este documento, si el menor en este momento ha dejado de serio - llegó a la mayoría de edad; en autos no tenemos una constancia directa que nos acredite esta situación pero de una fecha que aparece en un interrogatorio o en cuestionario - que se formuló, llegamos al conocimiento de que esta persona llegaría a la mayoría de edad el próximo mes de julio; - no tenemos la certeza, porque no existe constancia en - autos si está o no en el centro, vamos, no detenido, está dentro del Consejo Tutelar parece ser, hay constancias que nos hacen suponer que está bajo la custodia de los padres, todavía dentro del tratamiento del propio Consejo Tutelar.

Es verdad que de primera impresión podría pensarse que este régimen de los menores lejos de darle un - trato singular diría yo beneficioso, dado la propia naturaleza, se le está restringiendo, podría pensarse que se le están restringiendo o haciendo nugatorias sus garantías individuales, sobre el particular me remito a lo que tan brillantemente dice la señora Ministra Adato.

Con esas correcciones y estas modificaciones - mantengo mi proyecto en los términos que he apuntado.

EL P. PRESIDENTE.- Continúa a discusión el proyecto.

3.

Recoja la votación, señor Secretario.

EL M. CARPIZO MAC-GREGOR.- Yo escuché con toda atención lo que dijo la Ministra Adato y yo coincido en que probablemente el régimen que hoy existe es mucho mejor de lo que antes había.

La Exposición de Motivos de la Ley del Consejo Tutelar para menores del Estado de Sonora es muy clara, además parecen como mañotes casi todas las leyes de los Estados, respecto al tema son muy parecidos, yo he de decir el cual es un tema al cual no me he acercado no puedo hablar yo aunque me de cuenta de lo que dice la ley de las finalidades lo que se persiguió, yo el problema que tengo como duda, nada más quiero dejarlo apuntado aquí, es, cómo es posible que una serie de determinaciones de una ley establecen un régimen de excepciones en materia de garantías individuales, ese es todo el problema.

Leí con mucho cuidado el artículo 20 constitucional y la tesis es que no se aplica para los menores, bueno, yo creo que sería muy discutible y que tendría que estar la excepción en la propia Constitución.

Yo creo que en materia de garantías individuales, una ley no puede dar excepción, las excepciones para regímenes especiales tendría que estar en la propia Constitución, pero mis dudas y son dudas es: leyendo el proyecto, el hecho de que no se tenga la facultad de nombrar un abogado, pues la verdad sí queda un poco perplejo, no son delitos, yo estoy de acuerdo, no son delitos, no son faltas administrativas de acuerdo con la ley, sino son conductas antisociales y cómo se las definen, si desde

4.

luego no son delitos, pero yo creo que debería existir algo como que me precisara los tipos de estas conductas antisociales y no existen, por lo tanto hay la máxima libertad para esa especie de ya sé que erróneamente del Tribunal, - no el Consejo formado por tres personas, pero tienen una - libertad tal que a mí mi duda es sino por haber querido - proteger al menor, que es clarísimo, en alguna forma se le ha dejado en un estado de indefensión; por esta misma situación, todo lo relativo a pruebas también es algo pues - que asombra cómo está, hay momentos en que parece que los interesados no pueden aportar pruebas sino de oficio este Consejo Tutelar, y mi preocupación viene de algo que empieza a ser un clamor en la ciudad de México, porque ya son - varios casos que yo he escuchado en la Procuraduría del - Distrito Federal, cuando llega alguien detenido tiene el - derecho de hablar por teléfono, de avisar, pero a los menores no, porque no, como lo están en un régimen especial entonces no se enteran nadie, sino hasta que ya lo mandaron - al Consejo Tutelar; entonces yo no quiero hacer ninguna - afirmación, es la primera vez que me acerco al problema de los menores.

PODER Mi problema no es el sistema en sí de los menores, mi problema es pues que siento que hay un régimen de excepción en materia de garantías individuales y mi opinión ninguna ley lo puede hacer, si no es la propia constitución, pero yo quisiera, ser positivo, no dudo que hayamos avanzado mucho en esto que todo ese sistema de que ha desaparecido los Tribunales para menores y ahora los -- llamamos Consejo Tutelar para Menores, que desde luego no-

5.

son tribunales aunque parezcan que sí, son pasos hacia adelante, yo lo que creo es que con todo lo positivo que se va a necesitar ser muy claro a nivel constitucional pero no quiero decir una reforma constitucional, sino a través de la jurisprudencia, de ir afinando una serie de garantías que hoy en día no están en las leyes y que la verdad no encuentro las razones por las cuales se les excluyen al menor.

LA M. ADATOGREEN DE IBARRA.- Gracias, señor Presidente. Me parece sumamente interesante las reflexiones que formula el señor Ministro Carpizo y al respecto debo decir que lo que primero hay que dar respuesta es lo siguiente: No se trata de un cambio de nomenclatura ni un eufemismo, en cambio fue sustancial, de Tribunales para Menores pasaron a ser Consejos Tutelares para menores, pero esto no sólo fue una nomenclatura que maquillaba el sistema de vigilancia o de tratamiento respecto las conductas antisociales para menores, qué ocurría, antes se iba ante un juez para menores y se seguía un procedimiento muy semejante al de los adultos, con las mismas garantías que había para los adultos, qué pasó con el cambio que determina que todos los Estados de la República, después de que se dio la Ley del Consejo Tutelar para Menores en el Distrito Federal; convencido de la bondad del sistema lo adoptaron, que en lugar de haber un juez y un defensor para el menor, se integraran los Consejos Tutelares para menores que funcionaban colegiadamente.

No se juzga a los menores, hay un consejero, que es el que hace el proyecto de resolución, pero inter-

6.

vienen en la instrucción, valga la expresión del procedimiento para menores, un maestro, un médico y otro consejero de otra especialidad que debe de ser padre de familia, debe tener esas características porque la propia ley cuando se habla de qué requisitos deben tener los consejeros se determina de que deben ser o maestros o médicos o padres de familia y ellos integran el Consejo que ha de decidir sobre el procedimiento y el tratamiento que ha de prescribir para los menores; y qué ocurre? el que el procedimiento este de pruebas no es un procedimiento en que se ofrezca la prueba pericial o la testimonial o la serie de pruebas que técnicamente los Códigos Procesales Penales establecen, para los procedimientos de adultos sino que se pide información a los padres respecto de las conductas familiar del menor, se pide al maestro se informe y evalúe la conducta escolar del menor y también se pide información al médico respecto del estado de salud del menor, con estos elementos se determina la medida adecuada del tratamiento para el menor, pero ello no se lleve a cabo con un abogado; el abogado defiende cuestiones puramente de derecho y esto es de tratamiento inadecuado que se le ha dado al menor y que ha motivado como causa en una conducta antisocial y está siempre asistido por sus padres o por quien ejerza la patria potestad o la tutela, basta leer integralmente la ley que crea el Consejo Tutelar para menores para percatarse que tienen garantías y una asistencia desde el punto de vista tutelar más acentuada porque es un procedimiento totalmente diferente del que se sigue a los adultos, en donde los adultos tienen que pagarle a la sociedad haber violado las reglas del jue-

7.

go de la supervivencia de la sociedad, como es el juicio de reproche social que la pena se le hace efectiva a través - del procedimiento penal a los adultos y esa preocupación - del Ministro Carpizo que no parece muy válida esa afirmación pero además de válida, muy consecuente con su formación de constitucionalista de que le parece verdaderamente terrible de que no haya una definición de las conductas - que le puedan ser imputadas al menor, es un poco pues - - - - - irreal esta preocupación no en él, sino en la ley, porque en el enunciado de la ley, dice: "Son conductas antisociales de menores todas las conductas que causen un daño y - también las que todas las que en los adultos constituye delitos".

Por tanto no hay esa tipicidad abierta que tanto asusta a quienes somos fieles a la teoría tenaz, vinculados lo constitucional, es tipicidad cerrada porque no se leya a inventar al menor una conducta antisocial que no sea la conducta delictiva que se le puede atribuir a los - adultos...

- - - -

PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION

(sigue 3er. turno).

- 1 -

... es tipicidad cerrada, porque no se le va a inventar al menor una conducta antisocial que no sea la conducta delictiva que se le puede atribuir a los adultos, sino que esa conducta se convierte en antisocial en los menores, a virtud de que ellos no tienen capacidad de responder a un juicio de reproche social, porque no tienen la edad que determina la plena madurez del juicio valorativo para medir entre que se hace y qué no se hace, es por ello que yo siento que estas preocupaciones se desvanecen de una manera categórica y rotunda, si por ejemplo: damos una lectura rápida al capítulo de la Ley donde se advertirá la serie valga la expresión de garantías que en los adultos no se pudieran tener. Un ejemplo que exprese hace un rato, no hay la libertad provisional bajo de fianza, porque simple y sencillamente un menor que carezca de recursos no la puede tener, sin embargo sí puede tener alguien que responda adecuadamente por él; el ejercicio de la tutela, la patria potestad o la custodia del menor, y en caso específico es que muchísimos menores están bajo la guarda y custodia de quienes ejercen la patria potestad o de alguien que la haya ejercido o la pueda ejercer válidamente, satisfactoriamente en forma benéfica para el menor; es por ello que yo de ninguna manera siento preocupación de que no se está cumpliendo las garantías que de alguna forma pudieran tener todos los ciudadanos sin importar la edad, porque aquí revisando la ley nos percataremos que hay un procedimiento que tiene un término, un plazo para que se presente, si no hay abogado es porque la conducta no es delictiva, se tiene que averiguar qué hay de la formación del menor, falló quien incurrió en esa conducta antisocial; éste está - -

siempre acompañado de un promotor que vigila por sus derechos, pero además del promotor están quienes ejercen la guardia, tutela o patria potestad en el menor y tampoco hay tipicidad abierta, porque las mismas conductas -- que como delitos se le imputan a los adultos pueden ser imputadas a los menores, nada más que no con el carácter de delitos sino de una conducta antisocial y el problema no es el cambio de nomenclatura sino el cambio de sistema radical, total que busca efectivamente el que los menores se incorporen a la sociedad cuando sean adultos -- en un estado de mejores condiciones en el área educativa, médica y familiar; con esto creo que de alguna manera pueden desvanecerse las preocupaciones que tanto el Ministro González Martínez presenta como el Señor Ministro Carpizo nos apuntaba con su rigor constitucional.

MINISTRO FERNANDEZ DOBLADO:-- Muchas gracias, Señor Presidente, Señores Ministros; no cabe duda que éste es uno de los temas más importantes que tiene el Derecho Penal entre las normas constitucionales y el derecho de los menores frente a los cuestionamientos que han hecho los Señores Ministros Atanasio González Martínez y Jorge Carpizo y las contestaciones que ha dado no sólo el Ministro Ponente, sino con toda claridad también la Ministra Adato, no contrariándolos, sino tratando de disipar -- las dudas que se pudieran resultar respecto a la posible inconstitucionalidad de las leyes de menores como la que se cuestiona concretamente en este proyecto, yo quisiera solamente agregar algunas reflexiones de carácter que ya la Ministra Adato ha afirmado lo substancial con su intervención y me parece que da contestación clara, quiero -- yo añadir nada más lo siguiente: se ha dicho y parece -- ser una verdad, casi un dogma jurídico, que los menores-

- 3 -

están al margen del derecho penal y efectivamente están -
al margen del derecho penal, porque no cometen delitos,
les falta uno de los ingredientes esenciales del delito
que es la imputabilidad, como carecen de imputabilidad -
por su menor edad no son sujetos destinatarios de las -
normas penales, ni cometen delitos y al no incurrir en -
estos supuestos delitos no le son atribuibles y no que-
dan vinculados a las consecuencias jurídicas del delito
que son las penas en la necesidad de seguridad, entonces
es evidente que los menores si no están al margen del de-
recho penal no por eso la sociedad ante los hechos típi-
cos en que incurren, típicos de delito, pero no delito, -
las infracciones a la norma penal, pero que no llegan a
constituir delitos por falta de imputabilidad, frente a
esos hechos tampoco la sociedad puede quedar en actitud
pasiva, entonces ¿qué es lo que ocurre?, no los hace ob-
jeto o sujetos de un procedimiento represivo, ni de me-
didas de carácter punitivo ¿por qué?, por que están al-
margen del derecho penal, no incurrieron en delitos y -
por lo mismo no le son aplicables las consecuencias ju-
rídicas de los delitos, pero sí son objeto de un cambio-
de medidas tutelares de carácter curativo y educativo --
que tienden como dice el proyecto a vincularlos de nuevo
con la sociedad, tienden a evitar que a esa edad, a esa-
pequeña edad, a esa corta edad sigan por el camino de una
desviación incurriendo en alguna conducta antisocial que-
pueda producirles una conducta de mayor gravedad cuando -
lleguen a la mayoría de edad, pues bien, la sociedad y las
leyes procuran que los menores que han incurrido en infrac-
ciones a la ley penal sean así objeto de medidas tutela-
res no represivas ni punitivas, las medidas represivas y
punitivas infringidas a un menor de edad vendrían a des--

virtuar la misión de las penas que tienen también un carácter de prevención especial, vendrían a destruir al menor y de un ser que ha manifestado una conducta antisocial, lo convertirían en un elemento negativo, lo anularían moral y físicamente, es claro que lo anularían físicamente, bien, pero el hecho de que los menores estén al margen del derecho penal quiere decir que estén al margen de la Constitución, esa es una de las preocupaciones especiales que ha expresado el Doctor Carpizo, al no ser objeto de medidas represivas, ni de procedimientos represivos, ni de procedimientos penales; las sanciones penales quedan también al margen de ese capítulo de la Constitución que establece las garantías de que debe gozar todo procesado en los juicios del orden criminal y que están contenidas en el artículo 20 de la Constitución Jurídica y las que cuestiona severamente el quejoso aquí, que no se cumplen si están al margen de que no cometan delitos y no se les asocia por lo mismo a ello, ni se les somete a un procedimiento criminal, pues se quedan al margen de ese capítulo constitucional que establece que: debe gozar todo procesado en un juicio del orden criminal; ahora bien, por lo que se refiere, no a ese capítulo de garantías específicas que gozan los gobernados que tienen el carácter de procesados, sino a las demás garantías de la Constitución fundamentales, la garantía de audiencia, garantías de defensa, el derecho a aportar pruebas, a recurrir los acuerdos, etc., a mí me parece que el proyecto que nos ha presentado el Sr. Ministro Chapital tiene el precedente de la Ministra Adato, en caso similar se ha contestado de manera clara, no hay problema en cuanto a sus pruebas, aunque no se les está haciendo objeto de un proceso que tenga pruebas, sino que se trata de un procedimiento tutelar,

- 5 -

no obstante ello, están facultados los menores, sus asistentes y los instructores del procedimiento para recabar todo tipo de material probatorio que lleve al esclarecimiento de los hechos que se le imputan o se le imputaron al menor, pero no con un propósito inquisitivo o propósito meramente impositivo sino de oficio, no me refiero -- inquisitivo en el sentido de que se trate de buscar por el Juez elementos de procesamiento, sino de oficio; los Consejos Tutelares en estos casos buscan de buena fe -- los elementos probatorios para circunscribir el hecho -- que se le impute al menor, sus dimensiones, su gravedad y físicamente estudian la personalidad del menor infractor para ver qué medidas son las más idóneas para tratar de corregirlo en su conducta que aun cuando ha manifestado en su primer momento una desviación social, entonces no veo en este aspecto que haya limitación en -- cuanto al derecho de ofrecer pruebas, tampoco en cuanto al derecho de defenderse, tiene amplitud de medios dentro del procedimiento tutelar para exponer ellos y sus asesores y sus padres los motivos, las causas que los -- pudieron llevar a una infracción antisocial si es que -- está sucedió, tienen amplia forma de expresarse en defensa debidamente, pues se trata de menores debidamente -- asesorados por los órganos del Consejo Tutelar y por sus padres y tutores; de suerte que no veo yo las garantías que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales se vean vulneradas con este procedimiento tutelar que se le aplica al menor o a los menores, que por materia moldeable que son a esa edad, lo que trata la ley tutelar de menores es evitar a como dé lugar que por su corta edad los seres humanos sigan manifestando una probabilidad de los hechos antisociales, de suerte que no veo aquí tam--

- 6 -

no se vulneren las garantías de audiencia, de suerte que es posible decir que los menores sí están al margen del derecho penal, por lo mismo al margen de aquellas garantías de contenido penal, pero ello no quiere decir que estén al margen de la Constitución y que los procedimientos tutelares vulneren las demás garantías de la Constitución; ese es mi pensamiento.

M. PRESIDENTE:-- Señores Ministros informo a ustedes que son 4 los Señores Ministros que quieren hacer uso de la palabra en este orden: El señor Ministro Azuela, González Martínez, y de Silva Nava y El Sr. Ministro Rocha Díaz.-- Tiene la palabra el Sr. Mtro. Azuela.

M. AZUELA:-- Reitera mi voto que dí al Sr. Presidente, que aquí se aplica, porque estimé que las observaciones que se han hecho a este proyecto son superables, se ha dicho básicamente primero, que no debe existir un régimen de excepción que no está previsto en la Constitución, que es la Ley secundaria la que lo establece; y, en segundo lugar, se han exteriorizado una serie de inquietudes en cuanto a que este régimen protector de los menores pueda traducirse a un sistema que incluso resulte más reiterable en perjuicio de los menores que aquél que se establece en materia penal; en cuanto al primer planteamiento, yo considero que no se está propiamente en un régimen de excepción, sino que se trata de una situación específica que se refiere a menores y que la Constitución directamente no ha regulado . . .

(SIGUE CUARTO TURNO)

- 1 -

.... que se refiere a menores y que la Constitución directamente no ha regulado, pero que según nos lo han explicado -- con amplitud los señores Ministros Adato Green, Chapital Gutiérrez y Fernández Doblado, es un régimen que va más allá, en cuanto a protección de lo que son las garantías en derecho penal, de manera tal que aún si admitiéramos que se trata de un régimen de excepción; lo grave sería que fuera un régimen de excepción contrario a las garantías individuales; pero si admitiendo esa situación, es un régimen de excepción que favorece y va mas allá de las garantías individuales, estimo que esto no es contrario a la Constitución y en cuanto a las otras inquietudes, esto no puede resultar perjudicial -- aun se dio el ejemplo de la llamada telefónica-, yo creo que este es un problema de la aplicación de la Ley, un problema de aplicación de la Ley que se debe superar de dos maneras: -- uno, de manera política-administrativa, seleccionando adecuadamente a quienes funjan como funcionarios de estos Consejos Tutelares, --esto queda fuera de nuestra competencia--, lo segundo que sí quedaría dentro de nuestra competencia, es planteando como violatorios de la Constitución los actos arbitrarios que cometieran esos funcionarios -- cuando no cumplieran con las obligaciones que se establecen en este régimen tutelar que señalan las leyes respectivas-, por esos motivos, reitero que seguiré con el proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Ministro González Martínez.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Voy a ser muy breve señores Ministros; si escuché con mucha atención las palabras de la Ministra Adato Green, las palabras del Ministro Fernández Doblado y del Ministro Asuela; pero yo sigo ahora con más dudas, porque, realmente es muy bello lo que se ha dicho, pero,

- 2 -

si analizamos este proyecto que estamos viendo, por ejemplo, me hago una serie de cuestionamientos, dijéramos no hay imputabilidad, no hay imputabilidad, pero según los hechos de esta demanda, cuatro meses después de esa conducta antisocial, es detenido este chamaco y aparentemente no hay ninguna averiguación, una investigación, de si cometió la conducta antisocial o no, - después, de lo que se duele - y eso es aspecto de la Ley, no es de, en un momento dado de funcionario, de -- que el consejero instructor inmediatamente ordenó que se enviara -aquí dice que quedara internado el menor quejoso en el Centro Intermedio de Menores Infractores-; es decir, sin la posibilidad de que se pudiera haber dejado con los padres del menor, para hacer una investigación; aquí, no aparece para nada esa investigación de, si existió o no, la conducta antisocial, si hubiera sido detenido el menor "infraganti", todavía, "infraganti"; no sé si sea el término, -porque veo, hay sonrisa-, tal vez no sea el "infraganti", pero en el momento de cometer la conducta antisocial, pues yo creo, que cambiaría un poco la situación, pero entonces, para mí, -yo soy padre, --afortunadamente; mis hijos ya son mayores de edad, y no tuve yo ningún problema-, pero aquí, estamos viendo a dos padres, que están interponiendo un amparo, porque les hicieron un reproche; esa es, la conducta que se ha cometido, un reproche a los padres, al alejar al menor del hogar, para mí, esa es una sanción, al retirar al menor de su hogar, del seno de su hogar, sin ningún estudio previo, de que si los padres son los culpables de la conducta antisocial, de que es un matrimonio mal --avenido, de que la conducta del padre o de la madre es indebida y que eso ha provocado la conducta antisocial del menor, pues yo siento que "a pre", estamos nosotros, para mí, sancionando esa conducta antisocial, la sanción para mí, es el reti

- 3 -

ro del hogar de este menor y si vamos al aspecto este, de -
que está internado el menor quejoso en el Centro Intermedio
de Menores Infractores, y que dicen, es para orientar su --
conducta, pues, yo me pongo y pienso, bueno, los Centros de
Readaptación o Reclusorios, -se supone también, están orien-
tados a mejorar la conducta de los procesados- y desgracia-
damente sabemos que en muy pocos casos sucede eso. Que no -
serán esos Centros de Readaptación, -Centro Intermedio de Me-
nores Infractores-, no será también un problema y con la fa-
cilidad de que una persona, tomando en cuenta una ley, sin
que para mí, que esa Ley de ciertas oportunidades que da -
nuestra Constitución para defender al menor, pues lo ale-
jan de su hogar para después averiguar, "matenlo en calien-
te", lo detienen y ahí lo dejan para después averiguar. Yo
siento que ahí está la conducta, ahí, está el reproche que
se le está haciendo a los padres, pero sin haber sabido en
primer lugar, si el menor cometió o no, la conducta ilícita
o antisocial; y en segundo lugar, si los padres son o no -
culpables de esa posible conducta antisocial, para mí siento,
cuando menos en este caso, en este caso concreto, si hay --
alguna falla y para mí, yo estoy en contra del proyecto.

EL H. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Ministro de
Silva Nava.

EL MINISTRO DE SILVA.- Gracias señor Presidente, -
yo creo que es necesario hacer muchas distinciones en este -
tema, estamos todos conscientes de que el menor no esta suje-
to a las normas del derecho penal, pero no es el derecho pe-
nal el único problema al que puede presentarse ^aun gobernado, ^{do},
también tienen derecho de naturaleza civil y no por ser meno-
res pueden ser privados de sus propiedades o derechos sin pre-
vio juicio. En el caso están a través de sus representantes y
se que enfrentan un problema sucesorio; en donde podrán hacer
valer todos sus derechos en un juicio sucesorio; es decir, el

- 4 -

argumento para establecer que determinadas garantías no son aplicables no deviene de estar ante un problema no penal, - porque las garantías son aplicables en todos los casos, ciertamente el artículo 20, constitucional, establece garantías - para el procesado, pero no son las únicas, que establece la Constitución; el 16 dice: "nadie puede ser molestado, "nadie", no dice los mayores y no dice, en caso de derecho penal o -- en caso de delitos penales; el 19, dice: "ninguna detención, podrá prolongarse por más de tres días", no dice, las detenciones de menores si son válidas aunque se prolonguen por -- más de tres días, o sea que el problema no se reduce a ver - si se aplica o no el 20, Constitucional, si el 20, es para - procesados, estoy de acuerdo que no lo vamos a hacer valer - en un juicio civil o laboral, tampoco lo vamos a hacer valer en un juicio en materia penal, pero eso no implica que no se tenga garantías, lo que hay que definir es, si se está o no en presencia de hechos violatorios de garantías, que es lo - que hace el Consejo Tutelar para Menores, substituirse en -- las funciones de los padres; los padres tienen la obligación y la responsabilidad de educar a sus hijos y de encausarlos, cuando algo vale mal el Estado se substituye en ellos, o sea, llámense padres o quien ejerza la patria potestad o la tutela, el estado no está actuando como autoridad, está actuando como tutor, -si un padre manda a su hijo a la cama sin cenar o lo encierra-, no está violando garantías, si eso que no hizo el padre, lo hace el Consejo Tutelar, no está violando garantías, es una substitución en una función familiar y ésto es lo que explica la no aplicación de ciertas garantías, que no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicho, sino, un acto a través, o mediante el cual el estado se substituye en funciones y responsabilidades de los particulares, pero - esto no resuelve, desde el punto de vista, el problema del -

- 6 -

un acto de privación definitiva, entonces estaríamos en presencia de una violación al artículo 16, si es que la decisión no se encuentra debidamente fundamentada y motivada.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro Rocha.

EL M. ROCHA.- Gracias señor Presidente, quiero -- expresar brevemente algunas de las razones por las cuales -- votaré a favor del proyecto y hacer una respetuosa sugerencia al señor Ministro Ponente; comparto sus conclusiones y desde luego, también comparto las conclusiones del señor Ministro de Silva, aún cuando en la especie, lo que en realidad se cuestionó fue la violación de las garantías contenidas en el artículo 20, en el proyecto se refiere exclusivamente a este tema y lo que se ha diluido en relación a lo -- que si disfrutaban los menores o no de las garantías individuales, pues está excluido de la problemática que este asunto presenta, por lo que hace a la violación de garantías de los padres, igualmente está entendido en mi opinión en el -- proyecto, por cuanto a que no se está privando a los padres de la patria potestad y simplemente, por las razones de orden público innegablemente que existen en estos asuntos, se está privando de la custodia exclusivamente de los menores, yo creo que, -- y ésta es mi respetuosa sugerencia al señor Ministro Ponente, -- que, debería invocarse en la materia específica, el párrafo final del artículo 40. Constitucional, -- en nuestro ⁴ constituyente de 17, de origen, no consideró que la materia de menores mereciera el rango constitucional y -- no existía precepto que se refiriese a los menores cuando -- exclusivamente el licitante laboral le prohibiese trabajo -- de los menores, es por reforma posterior del artículo 40. -- que se agrega el párrafo final que dice: "es deber de los -- padres...."

(SIGUE QUINTO TURNO)

- 5 -

menor, quedan todavía pendientes de resolver el problema de -
los padres, que se ven afectados en sus derechos en el ejerci-
cio de la patria potestad, no podemos decir que se violan ga-
rantías de un menor, porque entonces cambia el problema de --
violación de garantías, pero pueden o no violarse las garan-
tías de los padres cuando se afecta el ejercicio de la patria
potestad, cuando sin su consentimiento, el Estado se substituye
en ellos, - eso no lo puede alegar el menor, pero si lo -
pueden alegar los padres, le están afectando sus derechos, --
provenientes de su relación familiar y de su obligación de --
originaria educación de los hijos sin su consentimiento, si -
un padre se porta mal, puede llegar incluso a producirse un -
procedimiento que lleve a la privación de la patria potestad;
en caso de divorcio, debe definirse quién de los dos conyuges
va a ejercer la tutela y en esos procedimientos, los conyuges,
los padres, deben ser oídos y vencidos, podrán tomarse providen-
cias precautorias, pero, para llegar a una definición, es nec-
sario que los padres sean oídos. Luego tenemos que ver si los
padres están o no, en el caso del artículo 16, o en el del ar-
tículo 14 Constitucional, si entendemos que se trata de un --
acto de privación de derechos la afectación que implica el ng-
gar el ejercicio de la patria potestad con toda su plenitud,
si es una privación de derechos, debe operar el artículo 14,-
Constitucional, aunque el asunto no sea penal, porque el 14,
Constitucional, opera para todas las materias; para la penal,
para la civil, para la administrativa y porqué no, para la de
familia, para la de relaciones, si es un acto de molestia, es-
taremos en presencia de una violación para los padres -artícu-
lo 16 constitucional-, o sea que si entendemos que se permite
una privación definitiva del ejercicio de la patria potestad,
es necesaria la garantía de audiencia a los padres, si acepta-
mos que se trata simplemente de un acto de molestia y no de -

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1989.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LOPEZ.

...., por reforma posterior del Artículo 4º, que se agrega el párrafo inal que dice: "...Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y su salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas". Estando de origen excluido del Sistema Constitucional del Régimen de los menores, se dejó en manos del Legislador Ordinario; el Legislador Ordinario es el que precisó mayoría de edad, y es el que precisó derechos de los menores.

En abundancia de lo que ha manifestado el señor Ministro De Silva, los Códigos Civiles de todos los Estados de la República, que contienen disposición de que la autoridad - está obligada a apoyar en primer lugar a los padres para el cumplimiento por los menores de las correcciones disciplinarias que los padres estimen pertinentes respecto de los hijos, y solamente en casos excepcionales, o sea, cuando hay una conducta del menor, -que como bien indicó la Ministra Adato-, - causa daño ^{quº} correspondería a alguno de los tipos delictivos contenidos en las Leyes Penales, es en los casos en que se - substituye por lo que hace a la guarda y a algunas adiciones de patria potestad; pero no en la patria potestad; a final de cuentas viene a reconocer que la patria potestad no es un derecho, es un conjunto de derechos y obligaciones, es una situación jurídica en la que se encuentran ciertas personas respecto de un menor con el que los liga vínculos de sangre.

En consecuencia, yo considero que si bien lo que se ha expresado por el señor Ministro De Silva, es atendible, no es específicamente en la materia que el proyecto atiende, sino atiende exclusivamente a la eventual violación de las garantías expresadas por el Artículo 20 Constitucional, y aquí

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1939.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LÓPEZ.

es clarísimo el proyecto, y estoy con el proyecto, de que no rigen esas garantías de procesado para un menor que no puede ser procesado; y por lo que hace a su régimen especial de -- protección, pues está señalado por el párrafo final del Artículo 40, y la violación del párrafo final del artículo 40, tendría que ser en cuanto a que se violentaran las finalidades constitucionales señaladas; o sea, si las disposiciones del Legislador Ordinario son contrarias a la salud física o mental del menor, o a la satisfacción de sus necesidades, y es obvio que un Consejo diseñado para reintegrarlo, que tiene por objeto lograr el mejor desarrollo físico y mental del menor, no podría contemplar ese párrafo final del artículo -- 40 Constitucional.

EL H. PRESIDENTE.- Continúa a discusión el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro Díaz Romero.

EL H. DÍAZ ROMERO.- Gracias señor Presidente. Señores Ministros: Después de haber escuchado las intervenciones de los Ministros que se antecedieron en el uso de la palabra, llego a pensar que la intervención del señor Ministro Carpizo fue muy importante, porque me hizo reflexionar acerca de un aspecto derivado de lo que él manifestó.

Y yo trazo una línea divisoria, una vez que se ha comprobado la conducta antisocial del menor, estoy plenamente de acuerdo en todo lo que han externado los señores Ministros que están de acuerdo con el proyecto; pero antes de -- eso, se tiene que comprobar la conducta antisocial que está constituida por hechos y omisiones que son reprobables en sociedad, esta comprobación de los hechos, creo yo que no puede quedar al margen de la Constitución y del Derecho, todo lo -- que se dice respecto de las medidas en donde el Estado substituye a los padres y toma algunas determinaciones en rela--

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1969.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LÓPEZ.

ción con el menor, sacándolo de su ámbito familiar o del que está acostumbrado a llevar, parte de un supuesto de la existencia de esa conducta antisocial; esto para mí, he reflexionado que es importante, porque leyendo el proyecto me doy cuenta que no existe dentro de la Ley -al menos así aparece de la página 36-, no existe un procedimiento mediante el cual al menor, o a sus representantes se les dé oportunidad de probar la existencia de esa conducta antisocial -repito-, estoy de acuerdo en que una vez que se compruebe esta conducta, se tomen todas las medidas que se establecen en la Ley; pero esa comprobación de los hechos, no creo yo que pueda quedar al margen de la Constitución y del Derecho, y observo que en la Ley ni siquiera se dice cuál comprobación de estos hechos u omisiones puede quedar o puede ser determinada por reglas de la lógica o del Derecho, o que remita, ya no digamos al Código de Procedimientos Penales, siquiera al Código de Procedimientos Civiles, o a cualquiera otra Reglamentación probatoria que pueda llevarnos a establecer con toda precisión y certeza que efectivamente se cometió esa conducta antisocial.

Por otra parte, acerca de lo que dice el señor Ministro Rocha Díaz, de que como no se ha establecido la determinación específica de la violación al artículo 20, al que -propriadamente o prácticamente se viene reduciendo el alegato-, no me preocupa mucho, porque estamos en frente de un amparo de un menor y procede perfectamente la suplencia de la queja. Insisto, en que si no existe dentro de la Ley una Reglamentación de la forma de probar los hechos antisociales, debíamos conceder el amparo por este aspecto, ¡claro!, a menos que se pruebe que se dan esas razones dentro de la Ley.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro Rocha Díaz.

EL M. ROCHA DIAZ.- Gracias señor Presidente. La in-

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1989.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LOPEZ.

intervención del señor Ministro Díaz Romero, pues revela su ^honda preocupación por el más estricto respeto a las garantías individuales, que obviamente compartimos en este Pleno todos los señores Ministros; pero yo creo que se está pues, soslayando algo que es resultante de nuestro Orden Jurídico Completo; es decir, no es que el Consejo Tutelar, sin la práctica de diligencia de averiguación alguna tome a un menor y lo interne en uno de sus centros educativos o de readaptación; y si normalmente una conducta delictuosa que causa daño es conocida por la autoridad encargada de la investigación de todas esas conductas, -- que es el Agente del Ministerio Público; y el Agente del Ministerio Público en toda su etapa de averiguación está sujeto a las normas que lo rigen, y es cuando ante la comprobación de la minoría de edad del sujeto y de la posible responsabilidad de los elementos que permiten presumir la responsabilidad del sujeto, que lo ponen a disposición del Consejo Tutelar; en consecuencia, todo lo que atiende a la etapa de averiguación está regulado; pero no tiene porqué estar regulado por las normas del Consejo Tutelar, sino está regulado por las normas que rigen la averiguación de los hechos. En la especie, se trata de un robo en una tienda, quién toma conocimiento del robo de una tienda?, pues el Agente del Ministerio Público; y el Agente -- del Ministerio Público practica todas las diligencias necesarias para: que se acredite la propiedad de lo robado, la existencia del crédito que haya habido posterior, todos los elementos que le permitirían en su momento llegar a hacer una consignación, identifica a presuntos responsables, y resulta que uno de los presuntos responsables es un menor, y entonces, en lugar de consignar de su averiguación al Juez Penal correspondiente por lo que hace al menor, pues turna copias de las actuaciones al Consejo Tutelar, para que el Consejo Tutelar tome conocimiento del asunto y ejerza sus atribuciones, no tendría la Ley, --

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1989.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LÓPEZ.

cuya constitucionalidad se impugna, prevenir todo un procedimiento de averiguación que no está a cargo del Consejo Tutelar, sino que está a cargo de otras autoridades.

En consecuencia, yo creo que en el caso, pues es el Ministerio Público quien ha practicado esas averiguaciones, y las ha practicado regido por las normas que le son aplicables: El Código de Procedimientos Penales en el Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, o cualquiera que sea el Ordenamiento que contiene las normas regulatorias de la averiguación que el Ministerio Público debe practicar.

Llegada a la conclusión por el Ministerio Público, turnar al Consejo Tutelar; y una vez que está en el Consejo Tutelar, ya la Ley misma, cuya constitucionalidad se ataca, establece el sistema más abierto, la obligación de oír a todos los involucrados: menor, quienes ejercen la patria potestad, tutela, posible custodia del menor, tiene el menor un procurador que atiende a sus necesidades, y llamémosle en alguna medida "defensa", un consejero; un consejero que va a atender a la mejor protección del menor, donde no podríamos simplemente esperar el resultado; es decir, el resultado y otorgamiento de una protección que está sujeta a un procedimiento tan rígido, que eventualmente haría nugatoria, lo que ya bien dijo el señor Ministro De Silva; es decir, cuando el padre sanciona a su hijo: dejándolo sin cenar o prohibiéndole asistir a una fiesta, pues no viola garantía individual alguna, ni tendría porqué el Código Civil establecer que para que existan ciertos actos derivados de la patria potestad, sería necesario que se siguieran las siguientes reglas, que se recibieran tales pruebas, se valoraran conforme a tales reglas, hubiera período de alegatos, y en consecuencia, el padre dijera se aplica o no la corrección que estima adecuada.

Como bien dijo el señor Ministro De Silva, cuando se llega al extremo de que el menor comete una conducta que causa

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1989.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LÓPEZ.

daño o una conducta que de haber sido imputable merecería sanción penal, en estos casos es el Estado el que se sub^gtituye a los padres si son los que ejercen la patria potestad, o a quien ejerce la patria potestad o tutela dada su obvia deficiencia, la obvia deficiencia está acreditada con la comisión de esta conducta antisocial y pues no podría estar sujeto a un procedimiento de Derecho estricto.

Esa es la razón por la cual en mi opinión, el proyecto es fundado, y con las observaciones que ya ha admitido el señor Ministro Ponente, y si deseara reforzarlo con el argumento del artículo 49, que no me parece indispensable; pero que creo que contribuiría al fortalecimiento de su conclusión, yo me permitiré votar con el proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro Chapital.

EL M. CHAPITAL.- Gracias señor Presidente. Señores Ministros: Desde luego con el ánimo de mejorar el sentido del planteamiento; es decir, en apoyo del proyecto, se podría incorporar la parte relativa al artículo 49, lo que con^gsagra al último párrafo del Artículo 49 Constitucional.

Quisiera hacer referencia a algunas observaciones e inquietudes del señor Ministro Atanasio González Martínez, en cuanto a actos concretos de aplicación. El se refería -- pues a que el acto en sí del Consejo Tutelar, podría adolecer de algunos vicios; es precisamente eso lo que quiero apuntar, no se refieren a la inconstitucionalidad de la Ley, sino al acto concreto cuya reserva dejamos al Tribunal correspondiente para que lo analice en la esfera de su competencia.

Finalmente, creo con esto poder responder alguna inquietud del señor Ministro Díaz Romero, la Ley, el Consejo Tutelar; la Ley que crea el Consejo Tutelar Para Menores del Estado de Sonora, señala en el artículo 46, congruente con la idea que apunta el Ministro Rocha Díaz: "Cualquier autoridad

TRIBUNAL EN PLENO.
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 1989.

QUINTO TURNO.
CARRERA - LOPEZ.

ante la que sea presentado un menor, señalado como responsable de una conducta antisocial, lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo Tutelar o de sus Delegaciones, proveyendo sin demora las medidas provisionales correspondientes, -- con oficio sobre los hechos o acta que acerca de los mismos se hubiese levantado".

El Artículo 47 señala: Si el menor no está a disposición del Consejo Tutelar, el Instructor que hubiese tomado conocimiento del caso, lo citará. De no lograrse la presentación voluntaria, podrá ordenar su comparecencia, para lo -- que emitirá mandamiento escrito en el que se expresarán los fundamentos legales y técnicos del mismo. En casos graves, -- el Consejero Instructor, podrá ordenar la presentación sin -- previa citación."

El Artículo 49 para mí es fundamental: "Con base -- en esta investigación, el Consejero Instructor resolverá dentro de las 72 horas siguientes al ingreso del menor, si éste queda en libertad incondicional.....

(CONTINUA SEXTO TURNO)

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

- 1 -

....."dentro de las 72 horas siguientes al ingreso del menor, - si este queda en libertad incondicional y se entrega a quien -- ejerza la patria potestad, la tutela, o lo tengan bajo su mando o cuidado, quedando sujeto al Consejo Tutelar para la continuación del procedimiento o decidirá si debe ser internado provisionalmente en el Centro de Tratamiento; en todo caso, se expresarán en la resolución que se dicte de acuerdo a los fundamentos técnicos y legales..."; el artículo 50 alude a los términos en que deberá seguirse el procedimiento y encuentro otro -- precepto que desde mi punto de vista parece ilustrativo; artículo 51: "...Cuando el menor haya incurrido en una conducta antisocial no prevista como delito o como infracción administrativa, el Consejero Instructor, después de practicar la investigación, -- a la que se hizo referencia hace un momento- decidirá en una segunda audiencia después de oír al menor, a los interesados --si los hay-, al Procurador de la Defensa del Menor, y a la familia, cuál es la medida que debe aplicarse, la que no podrá ser la de internación en el Centro de Tratamiento, a menos que se trate de un -- caso de reincidencia; creo que con estas disposiciones podría quedar contestada la inquietud del señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro De Silva Nava;

SEÑOR MINISTRO DE SILVA NAVA: Gracias señor Presidente; no tengo en mente cuales fueron los planteamientos de los precedentes -- que se invocan en la demanda; pero en el caso concreto el amparo está promovido por Jesús Camou Molina y Florencia Alegría Mendoza, por su propio derecho y en representación de su menor hijo; -- y entre otras cosas podemos referirnos --en la foja 30, en el punto 5o. entre otros agravios dice: "...Por otro lado, contrariamente a como lo sostiene el Juez de Distrito, la resolución a que se

- 2 -

→ "refiere y la ley número 74, por ser esta impugnada, sí impide - ejercer la patria potestad sobre el menor, porque precisamente - el artículo 4o. da el derecho a ambos para velar por la familia" y mas adelante citan unos preceptos del Código Civil del Estado; dice: "...y ese ejercicio solo puede suspenderse por la senten- cia que determine ello, emitida por un Tribunal competente, etc. etc."; habla de la privación de la custodia; puede ser que sea - fundado o infundado esto, pero a mí me gustaría ver otros proyec- tos, en que se hiciera el estudio completo del tema.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está usted pidiendo la suspensión de este asunto...? tiene la palabra el señor Ministro Ponente;

SEÑOR MINISTRO CHAPITAL GUTIERREZ: Entiendo entonces que para el Ministro De Silva el estudio no es completo...?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Así es; de acuerdo con el señor Mi- nistro De Silva, sí existe un concepto de violación de los promo- ventos, padres del menor, en virtud de que no solamente promueven como padres del menor, sino por su propio derecho; y hacen valer- en la revisión directa la violación al artículo 4o. Constitucio- nal, al menos así lo entendí yo señor Ministro; tiene la palabra- el señor Ministro Ponente;

SEÑOR MINISTRO CHAPITAL GUTIERREZ: Gracias señor Presidente; no- es con el ánimo de no atender la sugerencia, pero estimo que la - propuesta que hago a ustedes es completa, por tanto así la manten- go.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Ro- cha Díaz:

SEÑOR MINISTRO ROCHA DIAZ: Gracias señor Presidente; en los con- ceptos de violación, no en los agravios, en realidad los padres - por su propio derecho, estarían afirmando una violación a princi-

- 3 -

pios de legalidad, no de constitucionalidad; y estarían afectando al acto de aplicación que es el que priva de la custodia y - eso, pues, tendría que analizarse por el Colegiado en los términos que reserva el proyecto; no hay en los conceptos de violación, sino hasta después en el agravio, la violación del artículo 4o. y por lo que hace a los padres, no habría porqué suplir la deficiencia de la queja.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro-Carpizo:

SEÑOR MINISTRO JORGE CARPIZO: Voy a ser extraordinariamente -- breve; creo que todos los que hemos intervenido tenemos una misma preocupación; que realmente este régimen sea lo mejor para los menores; creo que nadie discrepa de esto; yo he escuchado con toda atención lo que han dicho; yo podría, -perdón- yo pediría -no sé- en esta ocasión ya dijo el señor Ponente y lo respeto, pero en otra ocasión que se estudie este régimen de menores, el aspecto de la libertad bajo caución o provisional; o sea, de todos los argumentos que escuché no hay uno que me convenza de-- porqué no van a tener los menores este derecho; pero además, en el caso concreto -en el que estamos- hasta donde yo recuerdo, de la ponencia, no veo la cantidad que robó y el joven éste estuvo detenido del 23 de agosto de 1986, y por los datos que tenemos, - todavía sigue detenido; me queda una duda que le preguntaré a la señora Ministra Adato, pero no acá, para no alargar el debate; - hay otra cosa que no me explico: y cuando cumplen 18 años, pues se terminó el régimen de menores...? pero dice la ley en su artículo muy claro, que es este Consejo Tutelar quien decide si -- sigue recluso, perdón -no es recluso- sino "invitado" en ese Consejo Tutelar o no, verdad... entonces, yo lo que digo -creo-- que ha sido muy buen debate- a todos nos une la misma finalidad;

- 4 -

yo no estoy diciendo que todo el sistema sea malo, sino dije - que se han dado pasos hacia adelante; mi preocupación es que - hay ciertos aspectos específicos en los que yo creo que lo podemos mejorar; porqué nos vamos a cerrar a esto...? y planteo uno muy concreto para la próxima ocasión que exista un proyecto sobre este problema que es porqué no tienen derecho a la libertad bajo caución o provisional y si esto viola alguna garantía constitucional o no... bien...

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Continúa a discusión; tiene la palabra la señora Ministra Adato:

SEÑORA MINISTRA VICTORIA ADATO GREEN: Gracias señor Presidente; Gracias... no voy a dar respuesta en esta ocasión al Ministro -- Carpizo, porque para ser respetuosa del debate, solo he contestado lo que se ha planteado en el proyecto; podemos hacer mil disquisiciones en relación a la Ley de los Consejos Tutelares para Menores; por ejemplo, el momento de la consignación del delito; - si fue un día antes de que cumpla 18 años, va a quedar impune; - si después del procedimiento se sigue ante el Consejo Tutelar y el sujeto tiene ya 18 años, pero cometió el delito cuando no tenía 18; una serie de situaciones y el cumplimiento de los 18 -- años; por ejemplo, a manera de sembrar inquietudes, podemos sembrar no una inquietud, un grano de inquietud, sino un océano de inquietudes; por ejemplo: algo tan serio como esto: si en un momento determinado ¿qué se va a hacer con la gran delincuencia -- que existe en relación a contratar a menores que les falten escasos días para cumplir los 18 años, sabedores de que el procedimiento para menores termina en un momento determinado o es cuestionado si ya tiene válida competencia el Consejo Tutelar para -- Menores, para sancionar a alguien que ya ha cumplido los 18 años, pero que cometió el delito faltando un día para el cumplimiento d

- 5 -

la mayoría de edad; y algo muy grave, si mágicamente al cumplir-
18 años se adquiere esa imputabilidad sobre la que se han escri-
to muchos tomos en Materia Penal; si ya se tiene plena capacidad
de entender y dequerer el delito; plena capacidad psíquica para-
cometer el delito; si mágicamente el día en que se cumplen 18 --
años, ya se es imputable; si no tiene que hacerse un estudio por
menorizado de cada autor -entre comillas- de conductas antisocia-
les o de delitos; si en el momento de tener 18 años ya tienen ca-
pacidad de entender y de querer por el solo hecho de haber cum-
plido 18 años; hay un océano de inquietudes en torno a ello y --
que desde luego son determinantes para la preocupación que ini-
cialmente a esta discusión se planteó de la preocupación que to-
dos tenemos; no solamente del cumplimiento de las normas consti-
tucionales, sino de una protección real y efectiva a menores, --
sobre todo, en un país que como éste, lo conforman fundamental -
mente gentes que son jóvenes y que muchos son menores de edad; -
pero no voy a dar respuesta a porqué no disfruta de libertad ba-
jo caución, porque este no es el problema del proyecto, ni tam-
po qué pasa cuando un menor que ya cumplió los 18 años y se le -
mantiene dentro del régimen de tratamiento de menor, porque eso
no lo aborda el proyecto; no es tema del proyecto.

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está suficientemente discutido señ-
res Ministros...? recoja la votación señor Secretario...

C. SECRETARIO: Sí señor.

SEÑOR MINISTRO DE SILVA NAVA: Estoy en contra del proyecto por-
que a mi entender no analiza la--
totalidad de los puntos planteados

SEÑOR MINISTRO MAGAÑA CARDENAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ALBA LEYVA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO AZUELA GUITRON: Con el proyecto.

- 6 -

SEÑOR MINISTRO ROCHA DIAZ: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO CASTAÑON LEON: En contra.
SEÑOR MINISTRO LOPEZ CONTRERAS: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO FERNANDEZ DOBLADO: Conforme con el proyecto
SEÑOR MINISTRO PAVON VASCONCELOS: Con el proyecto.
SEÑORA MINISTRA ADATO GREEN: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO RODRIGUEZ ROLDAN: Con la consulta
SEÑOR MINISTRO MARTINEZ DELGADO: En los términos del voto del
Ministro De Silva.
SEÑOR MINISTRO CARPIZO: Contra el proyecto.
SEÑOR MINISTRO GONZALEZ MARTINEZ: En contra.
SEÑOR MINISTRO VILLAGORDOA LOZANO: En contra.
SEÑORA MINISTRA MORENO FLORES: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO CHAPITAL GUTIERREZ: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO DIAZ ROMERO: En contra.
SEÑOR MINISTRO SCHMILL ORDONEZ: Con el proyecto.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Conforme.

C. SECRETARIO: Señor Ministro Presidente, hay una mayoría de ---
trece votos contra siete en contra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En consecuencia: "PRIMERO.- EN LO QUE
ES MATERIA DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE SE -
REVISA: EN CONSECUENCIA, SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AM-
PARA NI PROTEGE A JESUS CAMOU MOLINA, FLORENCIA ALEGRIA MENDOZA Y
JOSE JESUS CAMOU ALEGRIA, EN CONTRA DE LA APROBACION, SANCION, --
PROMULGACION Y PUBLICACION DE LA LEY NUMERO SETENTA Y CUATRO QUE-
CREO EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES DEL ESTADO DE SONORA, QUE SE
RECLAMARON DEL CONGRESO, DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y DEL SECRE-
TARIO DE GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.- TERCERO.- PARA LOS
EFECTOS DE SU COMPETENCIA, SE RESERVA JURISDICCION AL TRIBUNAL CO-
LEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN HERMOSI--

- 7 -

"LLO, SONORA, AL QUE DEBERA REMITIRSELE COPIA AUTORIZADA DE ESTA EJECUTORIA Y EL JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE".

De cuenta señor Secretario;

AMPARO EN REVISION NUMERO 1597/88.

Amparo en revisión número 1597/88, promovido por Industrias Nacionales de Sonido, S.A., contra actos del Congreso - de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1983, y de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente en cuanto a sus artículos segundo, y 149 a 154 y 161 a 169, respectivamente. La Ponencia es del señor Ministro Schmill Ordoñez y propone sobreseer y negar el amparo a la quejosa.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Est_á consideración el proyecto; tiene la palabra el señor Ministro Rocha Díaz:

SEÑOR MINISTRO ROCHA DIAZ: Gracias señor Presidente; para informar a los señores Ministros que me encuentro impedido para el estudio, discusión y resolución del presente amparo en revisión, en virtud de haber formado parte del Congreso de la Unión cuando se dictó la ley impugnada y solicitar respetuosamente se califique - de legal el impedimento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a consideración de los señores -- Ministros el impedimento que hace valer el Ministro Rocha Díaz; -- pregunto si se califica de legal el impedimento...?

Aprobado.

Se admite por ser legal el impedimento que hace valer el señor Ministro Rocha Díaz; tome nota señor Secretario....

(sigue séptimo turno...)

- 1 -

M. PRESIDENTE.- Continúa a discusión el proyecto. Hay una pequeña salvedad en el resolutivo tercero, con una salvedad en el punto anterior para no englobar todas las autoridades.

M. SCHIMILL ORDONEZ.- Estoy de acuerdo.

M. PRESIDENTE.- Continúa a discusión. - Tiene la palabra el Ministro Rodríguez Roldán.

M. RODRIGUEZ ROLDAN.- Sólo para sugerir al Sr. Ministro ponente que en las fojas 25 en el primer renglón y 26 en el segundo punto resolutivo no se utilice la palabra "ejecutoria".

M. PDTE.- ¿Pondría usted "resolución"? En el punto resolutivo para no poner tanta "resolución" puse este fallo. - Con esa modificación, continúa a discusión. -- En votación económica ¿se aprueba la consulta? APROBADA.

En consecuencia, se resuelve: PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.- SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías en contra de los actos y autoridades especificadas en el considerando tercero de este fallo.- TERCERO.- Con la salvedad del punto resolutivo anterior, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Industrias Nacionales de Sonido, S.A. en contra de los actos y autoridades especificadas en el resultando primero de esta resolución.- NOTIFIQUESE.

M. PRESIDENTE.- Dé cuenta.

SECRETARIO:- Amparo en revisión 6669/80 promovido por INMOBILIARIA SICARTSA, S.A., contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y de otras autoridades.

- 2 -

des, consistentes en la expedición y aplicación del Código Civil de ese Estado, concretamente en cuanto a sus artículos 29 y 2415. --- La ponencia es del Sr. Ministro González Martínez.- En el proyecto se propone: Se declaren firmes el primer y tercer puntos resolutivos de la sentencia; en la materia de la revisión se revoque la sentencia recurrida y se conceda el amparo a la quejosa en contra de los actos reclamados de las autoridades que se indican en el resultando primero del proyecto.

M. PRESIDENTE.- Está a discusión el proyecto.

M. GONZALEZ MARTINEZ. - Señores Ministros, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Mtro. del Río y a la Sra. Ministra Adato Green por algunas correcciones que me han sugerido en las páginas 4, 8, 9, 10, 13 y 14, correcciones mecanográficas y también me quiero referir a algunos de sus comentarios que me hace la Ministra Adato y el Ministro del Río en cuanto a que voy a suprimir el primer punto resolutivo y pasar como primero el segundo, y el tercero queda como segundo, haciendo una modificación al final del resolutivo segundo en el penúltimo renglón que dice "que se precisaron en el considerando cuarto de esta sentencia" y al mismo tiempo, se suprime el párrafo de la página 25 para evitar el problema de lo del sobreseimiento que ya se ha visto aquí y se corre también la numeración; además la Ministra Adato me hacía la observación de que no se estudia y que debió de estudiarse el artículo 2415 del Código Civil; yo quería nadamás para superar, no sé si sea suficiente, pero para mí me es suficiente para superar ---

- 3 -

este no estudio del artículo 2415, le añadiría el porqué - no lo estamos estudiando en la página 30, es decir, aun -- cuando lo atacan de inconstitucionalidad con declarar la -- inconstitucionalidad del artículo 29 es más que suficiente para conceder el amparo porque el artículo 2415 esté relacionado con el artículo 29, entonces en esas condiciones -- presento este proyecto con esas correcciones.

M. PRESIDENTE.-- Sr. Ministro en la página 25,-- después de una serie de..

M. GONZALEZ MARTINEZ.-- Se suprime y se corre -- la numeración.

M. PRESIDENTE.-- No, porque sí queda firme la multa que se le impuso al Juez, por eso lo correcto es que en la materia de la revisión se revoca, para que queden -- firmes las multas.

M. GONZALEZ MARTINEZ.-- Ah, sí, perdóneme, estoy de acuerdo con la multa.

M. PRESIDENTE.-- Porque hay una cosa, con anotaciones del Sr. Ministro que tenía respecto al sobreseimiento en esta resolución, contradice lo resuelto en las últimas sesiones en forma notoriamente a lo que propuso al Tribunal Pleno el Sr. Ministro de Silva Nava, que apoyó el Sr. Ministro Rodríguez Roldán, en que decía que en estos casos en que el quejoso es recurrente, también es materia de la revisión toda la sentencia. -

Tiene la palabra el Mtro. Rocha....Mtro. Azuela.

M. AZUELA.-- En ese punto sí creo que debe también quedar firme el sobreseimiento decretado en virtud de que el recurrente no expresa agravios en su contra e incluso para hacerlo congruente con un proyecto del Ministro Rodríguez Roldán que vamos a ver después, que fue lo mismo -

- 4 -

que la vez pasada.

M. GONZALEZ MARTINEZ.- ¿Me permiten?

M. PRESIDENTE.- Como ustedes verán en este asunto si mal no recuerdo el quejoso fue el recurrente ¿no es así? y aun cuando él habla de que en ciertas partes de la sentencia, en el asunto del Ministro de Silva Nava hice notar que se estaba apartando de la práctica que estábamos usando en el Pleno de la Suprema Corte, y entonces él puso que no se puede decir que no es materia de la revisión por que aun cuando no hay agravio, puede existir la suplencia, entonces él inclusive en la parte final tenía un párrafo - que decía: debe confirmarse, en lugar de declararse firme - el sobreseimiento, porque no es el caso de suplir la deficiencia, es decir, con excepción de la multa que ahí sí, - no recurre la parte a quien pudiera perjudicar, por eso yo hice notar esto al Sr. Mtro. González Martínez y por eso - también creo yo que sí debe de atacarse en la revisión y - quedar firme por no existir agravio en su contra, porque - no fue recurrido por la parte a quien pudiera perjudicar la multa, que fue al Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Lázaro Cárdenas.

M. GONZALEZ MARTINEZ.- Perdón, sí, se me pasó ese detalle sí, en el cuarto renglón al hablar de la multa, esa debe quedar firme, la multa.

M. PRESIDENTE.- Nadamás quitar el sobreseimiento.

M. GONZALEZ MARTINEZ.- Quitando el sobreseimiento entonces queda el punto y sí es conveniente la modificación que se hace acá, porque ya nadamás se dice: "en la materia de la revisión, se revoca la sentencia".

- 5 -

M. PRESIDENTE.- El sobreseimiento sigue siendo mal fundado, habría que poner un punto resolutivo respecto del sobreseimiento para ser congruente al menos, su proyecto está de acuerdo con los precedentes anteriores a los -- del proyecto que hoy se estudia; si somos congruentes, entonces es materia de la revisión ese sobreseimiento y Ud.-- está declarando firme en el proyecto original.

M. GONZALEZ MARTINEZ.- No queda firme, yo decía queda firme, pero como no estoy...perdón, pido la palabra.- Si estamos suprimiendo el aspecto del sobreseimiento, por eso yo suprimía precisamente que quedaba firme el sobreseimiento, pero si ustedes, lo que podía quedar entonces es, queda firme el tercer punto resolutivo de la sentencia, o sea lo de la multa.

M. PRESIDENTE.- Retiro la objeción, es mejor -- que se quede así. Tiene la palabra el Mtro. Rocha, le agradezco su paciencia.

M. ROCHA. - Gracias señor Presidente.- Yo quisiera expresar a los señores Ministros, las preocupaciones por las cuales quiero solicitar al Mtro. ponente el retiro de este proyecto para su estudio a profundidad; estamos en presencia de un individuo que pretende acreditar su personalidad como representante de Inmobiliaria Sicartsa, S.A., con un testimonio de poder otorgado en el Distrito Federal y la autoridad responsable considera a dicho testimonio -- como un contrato de mandato, le aplica la disposición del Código Civil del Estado de Michoacán que señala un límite temporal a los mandatos y como éste había expirado, le desecha su personalidad; se plantea muy impropriamente como -- un conflicto de supremacía de la Ley General de Sociedades

- 6 -

Mercantiles y es fácil constatar, es obvio, que nunca habrá un problema de supremacía entre leyes federales y leyes locales, hay ámbitos materiales de validez distintos y lo primero que tendría que atender el proyecto es, bueno, ¿testemos en presencia de un contrato de mandato? o testamos en presencia del otorgamiento de representación de una Sociedad Anónima por medio jurídico distinto al del mandato? Esto se plantea en el juicio de amparo y en el recurso, y - simple y sencillamente el proyecto asume que es un contrato de mandato? El contrato de mandato tiene naturaleza civil y está regido por las disposiciones de los Códigos Civiles de cada una de las Entidades Federativas, pero el otorgamiento de representación de una sociedad anónima no está regido por el Código Civil en materia mercantil de competencia federal y en consecuencia, ahí se rige por la Ley de Sociedades Mercantiles; la doctrina y algunos precedentes de este Alto Tribunal han reconocido las diferencias del mandato y otras formas de otorgamiento de representación voluntaria; lo primero que tendríamos que saber para ver si estamos en presencia de un posible conflicto de leyes en el espacio, pues es ver si efectivamente estamos en el ámbito de validez sustantiva del Derecho Civil y no del Derecho Mercantil y para esto pues, es indispensable y no se aporten datos en el proyecto para poderlo hacer, determinar si el acto jurídico que consta en la escritura pública otorgada en el Distrito Federal, es un contrato de mandato o es el otorgamiento de representación de una sociedad anónima por medio distinto al mandato; está clarísimo que la designación de Gerente y otorgamiento de representación no es un contrato de mandato, está clarísimo, si aquí no lo estudiamos no podemos saber si estamos en presencia

- 7 -

de un conflicto de leyes en el espacio; asumiendo que estuviéramos en un conflicto de leyes en el espacio, habría -- que estudiar el 121 Constitucional, cuyo texto no se comprende por el proyecto; el proyecto nos dice muy brevemente: "Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por dicho precepto legal --el 121-- los actos públicos y los contratos celebrados fuera del territorio del Estado de Michoacán que deben producir efectos en ésta, deben de registrarse -- por lo previsto en el Código Civil en cita." Y dice en el siguiente párrafo en cuanto transcribe el 121: las autoridades de las Entidades Federativas deben dar crédito a los actos públicos; el 121 es uno de los artículos que constituye una curiosidad histórica de nuestra Constitución; el artículo 121 viene del texto del 115 de la Constitución -- del 57, cuyo primer texto aparece en la Constitución del -- 24 y que está inspirada en la Sección uno, romano, del -- artículo 4, romano, de la Constitución Norteamericana, texto que fue traducido literalmente, cambiando completamente la naturaleza jurídica de la disposición. Me voy a permitir leer el texto en inglés y hacer alguna reflexión que -- la doctrina ha dejado perfectamente clara; el texto en inglés dice, y pido disculpas por mi defectuosa pronunciación: "Full faith and Credit shall be given in each state to the Public Acts, Records and Judicial Proceedings of -- every other State." -- Y resulta que el "legislador Constitucional del 24 lo tradujo por actos.....

...SIGUE EL OCTAVO TURNO.

primera parte.

TRIBUNAL EN PLENO.
junio 21, 1939.

octavo turno. la. p.
Olvera y Morán

----- Resulta que en "public acts" el legislador, en vez de traducirlo por actos lo tradujo por leyes. La doctrina y Dr. Eduardo Trigueros, el Lic. Siqueiros, todos consistentemente han dicho: Este artículo está copiado y mal traducido. Donde se dice actos - debe decir leyes, y de este el proyecto no se hace cargo; no es lo mismo decir que tendrán válidas los actos o tendrán válidas las leyes. En un caso estaríamos aparentemente siguiendo la interpretación literal que el proyecto ya da al primer párrafo del artículo 121 ante un problema exclusivamente de forma: fe a los actos. Un problema de forma y lo que se pretende por la norma es contener una regla de conflicto de leyes en el espacio, o sea, cómo han de resolverse los problemas ante la eventual aplicación de una ley válida para una circunscripción territorial en otra circunscripción territorial. La Constitución de 1824 copió y dijo: - ".... en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los otros...." Pero obviamente, y toda la doctrina unánimemente lo ha reconocido, es una pésima traducción y no podemos irnos con ella, desarmando la única norma constitucional que nos permite resolver los problemas de conflictos de leyes en el espacio interno. La Constitución de 1857, en su artículo 115 reprodujo la disposición contenida por la Constitución de 1824, y desde entonces algunos de los juristas hicieron notar la impropia traducción, que quedó sin embargo intacta, por una de esas razones de inercia que suelen darse en nuestras normas constitucionales, en donde conservamos algunos artículos que son verdaderas piezas de museo como el artículo 121, cuando menos en su primer párrafo. Agregó la Constitución de 1857 que las leyes determinarían la forma de acreditar la validez de estos actos que deberían surtir efectos en el contrato o contexto, y resultó que la ley orgánica que apuntaba el artículo 115 nunca se dictó. Cuando se recoge esta primera disposición en el artículo 121 igualmente se dice: ".... El Congreso de la Unión por medio de leyes prescribirá la

TRIBUNAL EN PLENO.
junio 21, 1989.

OCTAVO TURNO. 1a.p.
Olvera-Morín

manera de probar...." y continúa. Y hasta la fecha no tenemos todavía esa ley orgánica, por lo que tenemos que recurrir al texto constitucional y a algunas otras disposiciones, entre las cuales son muy importantes los Códigos Civiles de los Estados. El Código Civil vigente, según reformas de 1987, nos da algunas ideas para la adecuada interpretación del artículo 121, ideas actuales. Dice el artículo 13: "... la determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: I.- Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas. II.- El estado de capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. III.- La constitución, régimen y exclusión de los derechos reales sobre inmuebles -- así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y en los bienes inmuebles se registrarán por los derechos del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros." Y luego vienen las disposiciones que distinguen forma y fondo: "... IV.- La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a todo lo que se prescribe en este Código cuando el acto pueda tener lugar en el Distrito Federal o en la República tratándose de material federal, y V.- Salvo lo previsto en los preceptos anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se registrarán por el derecho del lugar en que deban ejecutarse." En este proyecto no analizamos si estamos contemplando un problema de forma o de fondo. ¿Cómo debemos interpretar el artículo 121? Debemos tener plena conciencia de que el artículo 121 es auténticamente una pieza de museo -- en nuestra Constitución, que tenemos que tocar con muchísimo cuidado por que de lo contrario podemos llegar a una conclusión que aparentemente -- fundada desordene nuestro sistema para la solución de los conflictos de leyes en el espacio. Estimo, y lo digo con todo respeto porque este es un tema más o menos sofisticado en el ámbito del conocimiento de lo jurídico, porque participé en el proceso de reforma del Código Civil; estimo

TRIBUNAL EN PLENO.
junio 23, 1989.

Octavo turno. la.p.
Olvera - Morán

que se hace indispensable que el p. yecto se haga cargo de todos estos argumentos, que estudie, ahora que tenemos no solamente esta pieza de museo del 121 sino una reforma importantísima en el Código Civil Federal, que en alguna medida es la única forma que tenemos de acuerdo al propio artículo 121 y que tendríamos que considerar si no el Código Civil Federal es la norma que el artículo 121 señala y que en consecuencia -- tendría el carácter en nuestro artículo 13, de ley que prescribe la manera de ayudar a resolver los problema de conflictos de leyes en el espacio. Siento que esto no es posible que sea superado en un debate plenario sino que requeriría que el Sr. Mtro. ponente si así lo aceptara a mi respetuosa petición, se hiciera cargo básicamente de los tres temas que están en el fondo de este amparo: Primero.- Si se trata de un mandado obviamente en materia de competencia civil y de ámbito material de validez de normas locales o del otorgamiento de representación de una sociedad anónima que está en el ámbito material de validez de normas federales. Segundo.- Suponiendo que se llegara a la conclusión primera, hacer un estudio de cuál es el alcance que debe darse a la expresión -- "decretos, "actos", cuando hay una doctrina consistente de dos signos diciendo: Pues tradujimos muy mal, y hay que ver qué alcance se va a -- dar a esa disposición. Tercero.- ¿Cuál es el alcance normativo del nuevo artículo 13 del Código Civil Federal ante la ausencia de ley reglamentaria del artículo 121, y Cuarto.- Que estamos en presencia de un problema de fe pública de un documentos, o sea problema de forma, o si estamos en presencia de efectos jurídicos de un acto otorgado en una entidad federativa que va a surtirse en otra entidad federativa. Pido una disculpa -- por esta prolija explicación pero considero que era indispensable para expresar mis inquietudes sobre efecto de que se entendiera la petición que respetuosamente formulé.

EL MTRO. GONZALEZ MARTINEZ.- (Sigue segunda parte).

- 1 -

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro Ponente.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Bueno, es muy interesante la posición del señor Ministro Rocha Díaz, pero, yo sí - creo en primer lugar que la traducción que él hace pública, creo que no es la Ley, es otros conceptos, yo creo que podría darle una vista a eso; pediría que en todo caso, quedara pendiente el asunto para darle una revisada. Yo en principio creo, que nos hicimos cargo de uno de los agravios -- porque no era necesario estudiar los demás, pero yo quisiera darle una leída. No se si pudieramos dejar este asunto -- para mañana o dejarlo para días subsecuentes.

EL M. PRESIDENTE.- Usted mañana nos indicará señor Ministro si se ve el día de mañana o si quiere que se pase -- para las listas de agosto. Tiene la palabra el Ministro de -- Silva Nava.

EL M. DE SILVA.- Bueno yo estoy de acuerdo con el aplazamiento, si me permiten hacer una brevísima consideración; las diferencias entre el mandado y el otorgamiento de representación son muy variadas, pero si las va a reportar -- el señor por un lado y el informante por otro, es un problema de legalidad, no de constitucionalidad.

EL M. PRESIDENTE.- De cuenta señor Secretario con el amparo en revisión 6521/87, de la Ponencia del señor Ministro Rocha Díaz.

EL C. SECRETARIO.- Amparo en Revisión número 6521/87 -- relativo al amparo promovido por Laboratorio Fustery, S.A., -- contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 1987, concretamente en -- cuanto a su artículo 60, párrafo primero.

El proyecto ponencia del señor Ministro Rocha Díaz -- propone que en la materia de la revisión se revoque la sentencia recurrida y la Justicia de la Unión ampare y proteja a Laboratorios Fustery, S. A.

- 2 -

EL M. PRESIDENTE.- Esta a discusión el proyecto.
El Ministro Rocha Díaz tiene la palabra.

EL M. ROCHA DIAZ.- Gracias señor Presidente, quiero agradecer las aportaciones que me han hecho los señores Ministros en relación a este proyecto y cuyos nombres omito a petición de alguno de ellos, pero que prueba una vez más que el trabajo realizado en Cuerpos Colegiados, siempre logra mejores resultados que el trabajo individual, informo a los señores Ministros que atendiendo estas sugerencias corregiré el fallo de impresión mecanográficas y ottográficas en diversas páginas, en caso de que la consulta se apruebe, al momento de realizar el engrose; son las páginas 1, 2, 4, 5, 13, 17, 19, 24, 27, 33, 35, 42, 44, 45, 46 y 47, de estas fallas, debo destacar la que veo ahora en la página 27, para que diga "interrumpiendo la caducidad", en lugar de "interponiendo la caducidad" y la fecha del escrito que la interrumpe, que es dos de febrero de 1988 y no 1985, como se indica, sí, sostengo mi punto de vista del proyecto en la página 42 sobre declarar firme el sobreseimiento en los términos que ya lo ha expresado el señor Ministro Rodríguez Roldán y que yo comparto; se hará un cambio de redacción en la página 27, en cuanto a la competencia del Pleno para seguir la técnica tradicional de redacción y que no tengamos la tentación de lanzarnos a la poesía en la redacción de las cosas jurídicas cuya precisión es deseable y cuya repetición resulta sana; responderé las fojas 49 y 50, para incluir la tesis 86 del Informe de 1986 y completar los precedentes que existen que ya integran jurisprudencia; aún cuando no se encomendó al Ministro ponente del quinto asunto la preparación del texto y la revisión de la integración de la jurisprudencia, si la Presidencia así lo estimara conveniente, no tendría yo ningún inconveniente en ocuparme de hacer el estudio de los precedentes.

- 3 -

y en su caso someter a la correspondiente sesión del Pleno el texto de la tesis jurisprudencial que resulta y que llegaría por rubro "Valor agregado, devolución mensual de los saldos otorgados solo a determinados contribuyentes que - - branta el principio de equidad, artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir de 1987" y como consecuencia de algunas modificaciones, propongo los siguientes puntos resolutivos: Primero.- En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo.- Se sobresee en relación a los actos reclamados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tercero.- Con la salvedad a que se refiere el punto resolutivo anterior, la Justicia - de la Unión ampara y protege a Laboratorios Fustery, S. A. en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. En esos términos, someto a la consideración de los señores Ministros el proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- Perdón, señor Ministro, eso presupone que en la página 42, hay un cambio de redacción en el Considerando tercero. Entonces acepta usted, como usted mismo dijo, la tesis de los señores Ministros Rodríguez Rolán y de Silva, en donde dice usted, que toda la sentencia fue materia de la revisión. Hay que estimar la sentencia en ese aspecto en el sobreesamiento para que refleje en la misma forma que lo hizo el Ministro de Silva.....

(SIGUE NOVENO TURNO)

... el señor Ministro De Silva muy escuetamente verdad?, muy bien; continua a discusión el proyecto con las modificaciones que ha anunciado el señor Ministro Ponente.

Tiene la palabra el señor Ministro Azuela.

EL M. AZUELA GUITRON.- Unicamente para referirme al comentario que hizo el señor Ministro Rocha en torno a la afinación de la jurisprudencia; en este tipo de asuntos hubo un primer proyecto del señor Ministro Gutiérrez de Velasco, que tenía algunos matices especiales -- que llevaron, si la memoria no me falla, al señor Ministro López Contreras a considerar que por esos matices no debía incluirse como precedente.

Yo estimo que si se aprueba por la mayoría requerida este proyecto, esto soslayaría el problema de discutir si se incluye o no ese asunto como precedente, pues con este se tendría el quinto asunto.

EL M. PRESIDENTE.- Además creo que habla a nombre de todos los señores Ministros que aceptamos gustosos el ofrecimiento del señor Ministro Rocha, de elaborar el proyecto de tesis jurisprudencial, no es así señor Ministro Schmill?

EL M. SCHMILL ORDÓÑEZ.- Efectivamente.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro López Contreras.

EL M. LOPEZ CONTRERAS.- Gracias señor Presidente, como en casos anteriores en que se ha tratado este punto, yo votaré en contra porque pues, sigo considerando que la Ley del Impuesto al Valor Agregado en sus artículos correspondientes es constitucional, en cuanto da -

un trato desigual a desiguales, y ya sea que se trate --
del cobro de los impuestos o bien de la devolución de --
los saldos a favor como es el caso, por esa razón ya ha-
bía dado a ustedes con anterioridad, yo votaré en contra;
desde luego también quiero hacer la aclaración de que si
se acepta que no se incluya aquél primer precedente den-
tro de la formación de la jurisprudencia, solamente vota-
ré en contra; pero si se insiste en incluir aquél prece-
dente dentro de la formación de la jurisprudencia, formu-
laré voto particular en este caso.

EL M. PRESIDENTE.- Si ningún otro ministro, se-
ñor Ministro Villagordoa tiene la palabra.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO.- Muchas gracias se-
ñor Presidente, señores Ministros; en los mismos térmi-
nos que el señor Ministro López Contreras lo ha manifes-
tado, también votaré en contra de este proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- Algún otro Ministro quiere-
hacer uso de la palabra?. Recoja usted la votación nomi-
nal.

EL M. DE SILVA NAVA.- Conforme.

EL M. MAGAÑA CARDENAS.- Con el proyecto.

EL M. ALBA LEYVA.- Igual.

EL M. AZUELA GUITRON.- Con el proyecto.

EL M. ROCHA DIAZ.- Con el proyecto.

EL M. CASTAÑON LEON.- Conforme.

EL M. LOPEZ CONTRERAS.- En contra.

EL M. FERNANDEZ DOBLADO.- Con el proyecto.

EL M. PAVON VASCONCELOS.- De acuerdo.

LA M. ADATO G. DE IBARRA.- Con el proyecto.

EL M. RODRIGUEZ ROLDAN.- Sí.

EL M. MARTINEZ DELGADO.- Conforme con el pro--
yecto.

EL M. CARPIZO.- Con el proyecto.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Con el proyecto.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO.- En contra.

LA M. MORENO FLORES.- Conforme.

EL M. CHAPITAL GUTIERREZ.- Con el proyecto.

EL M. DIAZ ROMERO.- Con el proyecto.

EL M. SCHMILL ORDOÑEZ.- Con el proyecto.

EL M. DEL RIO RODRIGUEZ.- Estoy conforme con -
el proyecto.

EL C. SECRETARIO.- Hay mayoría de dieciocho vo-
tos con el proyecto, en contra dos votos.

EL M. PRESIDENTE.- En consecuencia, se declara:
"PRIMERO.- EN LA MATERIA DE LA REVISION SE REVOCA LA SEN-
TENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN RELACION CON
LOS ACTOS RECLAMADOS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDI-
TO PUBLICO.- TERCERO.- CON LA SALVEDAD A QUE SE REFIERE-
EL PUNTO RESOLUTIVO ANTERIOR, LA JUSTICIA DE LA UNION AM-
PARA Y PROTEGE A LABORATORIOS FUSTERY, S.A., EN CONTRA -
DE LAS AUTORIDADES Y POR LOS ACTOS PRECISADOS EN EL RE--
SULTANDO PRIMERO DE ESTA EJECUTORIA.- NOTIFIQUESE".

- - - - -

AMPARO EN REVISION 1400/88
INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.
PLANTA MINEROMETALURGICA DE COBRE.

EL C. SECRETARIO.- "..., contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 12 de abril de 1973, concretamente en cuanto a sus artículos 78 y 83. (PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SCHMILL ORDÓÑEZ)", y en ella se propone: en la materia de la revisión se revoque la sentencia recurrida, se niegue el amparo a la quejosa en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero del proyecto y se reserve jurisdicción al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en turno, con residencia en San Luis Potosí, estado del mismo nombre, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la propia resolución.

EL M. PRESIDENTE.- Está a consideración el proyecto, tiene la palabra el ministro Schmill.

EL M. SCHMILL ORDÓÑEZ.- Gracias señor Presidente, haré algunas correcciones de carácter mecanográfico, que me han sido sugeridas por los señores Ministros y amablemente por usted, este asunto tiene algunas peculiaridades; se aducen en la peculiaridad fundamentalmente es la siguiente; se aduce una serie de conceptos de violación en donde aparentemente se atacan de inconstitucionales los artículos 78 y 83 de la Ley del Seguro Social y diversos artículos fundamentalmente el 7, el 13 y el 20 del Reglamento de Empresas y determinación de grandes riesgos, consecuentemente, pero si se analizan con gran detalle, se percata uno que son argumentos en realidad de legalidad, pero que son planteados como argumentos.

de constitucionalidad, yo me hago cargo del estudio de -
ellos y voy analizando uno por uno de los mismos más - -
conspicuamente, parecían que era de constitucionalidad -
para demostrar que se trata a fin de cuentas de proble--
mas de legalidad. Por lo tanto no entré al estudio de la
naturaleza jurídica de las cuotas obrero-patronales, y -
propongo que no se ampare, negar el amparo a la quejosa;
no se si alguno de los Ministros piense, que por tratar--
se en el fondo de problemas de legalidad, no fuera compe--
tencia de este Pleno para hacer este estudio y negar el-
amparo; sin embargo, revisándolo y como aparentemente se
plantean problemas de constitucionalidad, decidí presen--
tar el estudio en la forma en que está redactado.

EL M. PRESIDENTE.-- Tiene la palabra el señor -
ministro De Silva.

EL M. DE SILVA NAVA.-- Gracias señor Presidente,
yo estoy de acuerdo en que aceptemos la competencia, por
que bien o mal están planteados como problemas de consti--
tucionalidad; pero si me parece que debe reformarse el -
proyecto en este aspecto, se analizan varios conceptos y
se dice esto es legal, no lo resolveremos simplemente de--
cimos es legal, y no le reservamos jurisdicción al Cole--
giado para analizar estos argumentos de legalidad les es--
tamos reservando el concepto de violación primero y quin--
to de su segunda parte; y quién va a estudiar los demás?
ni nosotros ni el Colegiado, si estimamos que hay legali--
dad debemos ampliar la reserva al Colegiado; si estima--
mos que es fundado entonces tendríamos que resolverlo, -
yo me inclinaría por lo primero, por ampliar la reserva--
de jurisdicción. Por lo demás yo estoy de acuerdo que no
se hace un estudio preciso sobre la naturaleza de las --

cuotas, pero no será por demás que al momento de emitir mi voto, haga la aclaración.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor - Ministro Ponente.

EL M. SCHMILL ORDÓÑEZ.- Gracias señor Presidente, esta era la preocupación que tenía yo presente cuando dije y expresé en mi intervención; yo estaría de acuerdo para que no se quedaran estos conceptos de violación que en realidad son el segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, ampliar la reserva de jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito, para que se hiciera cargo de ellos como conceptos de violación de legalidad.

EL M. PRESIDENTE.- Entonces modificaría usted el considerando séptimo, en la página cincuenta y nueve, no hace falta modificar los puntos resolutivos, porque toda la reserva la precisa usted en el considerando séptimo?

EL M. SCHMILL ORDÓÑEZ.- Aunque quizás si debería yo suprimir el punto segundo, en donde diga que "la -- Justicia de la Unión no ampara ni protege", en realidad tendría que hacerse toda la reserva de la jurisdicción en el punto tercero como segundo y suprimir el punto segundo, puesto que yo llegué a la conclusión de no amparar, por considerar que los conceptos de constitucionalidad eran infundados; entonces los puntos resolutivos que darán en la siguiente forma, el primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene que prevalecer el segundo, lo que pasa es que hay que hacer, decir nada más "con la salvedad a que se refiere el siguiente punto re-

solutivo, o sea tercero, todo lo demás tiene usted que hacer un pronunciamiento porque entonces sería competencia del Pleno.

EL M. SCHMILL ORDOÑEZ.- Sí, porque de esa manera se estaría uno haciendo cargo de los conceptos así como están presentados, no conducirían a la concesión del amparo como son aparentemente de constitucionalidad.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor - Ministro Azuela.

EL M. AZUELA GUITRON.- Quizás me permita una - pequeña broma el señor Ministro Ponente, porque dado el rigor con el que siempre examina los asuntos, en el caso me parecieron sumamente amplios y vagos los conceptos de violación y entonces los tradujo en un considerando diciendo lo que en realidad consideraba que debían decir, - y después examina los conceptos de violación traducidos por el Ponente, con lo cual resuelve prácticamente el asunto, tratando de soslayar todas las dificultades que el presente asunto podría tener, a grado tal incluso la máxima observación que se le ha hecho, es que le dejemos al Colegiado algunas cuestiones que no se estudiaban por nadie; pero yo pienso que en el caso sobre todo hay un clarísimo planteamiento de la violación al artículo 31, - fracción IV, en relación a la proporcionalidad y a la equidad, porque se está diciendo, a pesar de la traducción - que se hace en el proyecto de lo que realmente se quiso decir, que hay diferentes tipos de empresas que se están colocando en la misma clase y en el mismo grado de riesgo, y este es un planteamiento de violación directa al artículo 31, fracción IV.

Es cierto que el proyecto en la forma como está presentado, soslaya el problema de discutir la naturaleza jurídica de las aportaciones al Seguro Social, porque finalmente esta cuestión no se examina, pero cómo podemos superar este problema que aún la misma ponencia reconoce en la página cincuenta y seis, en la que dice: -- "Lo cual se traduce en un trato desigual en comparación con otras empresas que guardan la misma igualdad frente a la hipótesis normativa; y por el otro que la determinación de referencia viola en principio de proporcionalidad, porque aglutina indebidamente las actividades de extracción..."(LEYO); o sea incluso se está diciendo: "en la Legislación anterior estaban en clases diversas, ahora se aglutinan en una misma clase, y son empresas de peligrosidad diferentes"; este argumento para mí es claramente violatorio el planteamiento --no me estoy pronunciando sobre si es fundado o infundado--, pero es un planteamiento claro de inconstitucionalidad del precepto, porque va más allá del 31, fracción IV, esto se supera diciendo: "pronunciamientos todos que por supuesto entrañan cuestiones de aplicación e interpretación de los preceptos..."(LEYO); nada más que yo hago notar que en el caso no solamente se está cuestionando una resolución en la que se le comunicó la clase y grado de riesgo, sino que se está cuestionando el Reglamento de Clasificación de Empresas, para efectos de de cotización al Seguro Social, y la clasificación está en el Reglamento, y lo único que tiene la comunicación es decirle: en los términos del Reglamento quedas en esta clasificación; pero la objeción está en torno al problema de la proporcionalidad y equidad. De manera tal que yo considero que en el caso -

no podemos soslayar el análisis de la naturaleza jurídica de las aportaciones al Seguro Social, y en su caso el examen de estos planteamientos relacionados con la equidad y la proporcionalidad.

Apunto para mí otra situación que me parece importante y que estaría de acuerdo que esto también se dejara a la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, pero en el proyecto se analiza y es lo relacionado con el cumplimiento del artículo 83 de la Ley del Seguro Social y que no es un acatamiento en un acto de aplicación de la Ley o de un acto de aplicación del Reglamento, sino que el planteamiento es precisamente en torno al reglamento, el reglamento de Clasificación del grado de riesgo, tiene que cumplir con la Ley del Seguro Social, y la Ley del Seguro Social, el artículo 83, señala un riguroso procedimiento que hace posible que el Ejecutivo Federal, pueda introducir modificaciones...

PODER JUDICIAL DE LA
(CONTINUA TURNO DECIMO)
FEDERACION

- 1 -

riguroso procedimiento que hace posible que el Ejecutivo Federal pueda introducir modificación en las clases y grados - y este planteamiento esta poniendo en oposición el reglamento de la ley; esto entraña un tema interesante: es un problema de constitucionalidad o es problema de legalidad...? yo estimo que es un problema de legalidad; en la Tercera Sala - hemos tenido algún asunto que nos ha permitido profundizar - el tema y hemos llegado a la conclusión de que cuando se estima que la facultad reglamentaria va mas allá de la ley, -- estamos en presencia de un problema de legalidad y no de un problema de constitucionalidad en la medida en que no se está planteando un problema de violación directa a la Constitución, sino un problema de violación indirecta; se excede a la facultad reglamentaria porque el reglamento no tomó en -- cuenta el marco que establecía la ley; pero en la ponencia - se estudia ese problema y entonces al estudiar, se está dando la impresión de que se está examinando como problema de -- constitucionalidad; por estos motivos yo estoy en contra de la ponencia y en esa forma votaré si es que la misma se sostiene.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señores Ministros, desgraciadamente junto con un grupo de Ministros, tenemos que ausentarnos para concurrir a un compromiso de carácter oficial, de manera que no habría quorum; yo quisiera pedirles a ustedes, si no hay inconveniente, se suspenda la sesión y se levante la misma, para continuar mañana a las 11 horas. Están de acuerdo...?

De acuerdo.

Se levanta la sesión. (a las 14:5 horas).